

La Paz, B.C.S. a 06 de Julio del 2020

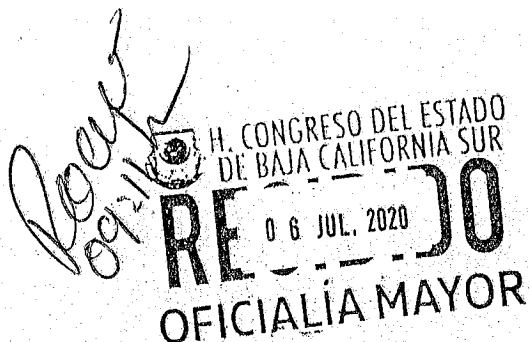
DIP. SOLEDAD SALDAÑA BAÑALEZ
Presidenta de la Diputación Permanente del Segundo
Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del
H. Congreso del Estado de Baja California Sur
P R E S E N T E.-

El suscrito Ciudadano Ramón Alejo Parra Ojeda en términos de lo dispuesto en el Artículo 57 Fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como de los Artículos 58, 59, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, por su conducto, someto a consideración de esa Soberanía Popular la siguiente ***Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur***".

Sin otro en particular, me es grato suscribirme a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. RAMÓN ALEJO PARRA OJEDA



La Paz, Baja California Sur, 06 de junio de 2020

AT'N.- Lic. Marcos Emiliano Pérez Beltrán
Oficial Mayor del Congreso
Del Estado de Baja California Sur

DIPUTADA SOLEDAD SALDAÑA BAÑALEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA XV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E

El suscrito **Ramón Alejo Parra Ojeda**, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario y residente de esta ciudad de La Paz, Baja California Sur, estado civil casado, señalándome como único representante común, con domicilio para oír y recibir notificaciones y toda clase de documentos el ubicado en la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en esta ciudad, y pongo a su disposición mi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] anexando a la presente copia de mi credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector [REDACTED] por su frente y [REDACTED] por el reverso, [REDACTED] debidamente inscrito en la lista Nominal de Electores correspondiente al Estado de Baja California Sur, de manera pacífica y respetuosa, y comprometido a observar las reglas del interés general y de no afectación al orden público, ante ustedes comparezco para exponer:

En términos de lo dispuesto por el artículo 57 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como de los

artículos 58, 59, 60, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, por su conducto, presento a consideración de esa Honorable Soberanía Popular la siguiente **Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto** mediante la cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la **Ley Electoral del Estado de Baja California Sur**, por lo tanto, la Iniciativa ciudadana que se presenta es una misma materia, y del contenido de la misma a nuestro juicio no se están contraviniendo otras disposiciones legales ya sean federales o estatales, y tomando en consideración la fecha de presentación, y que la presente iniciativa ciudadana propone diversas reformas, modificaciones y adiciones a la normatividad electoral de aplicación local, adquiere relevancia invocar además el artículo 105, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, y del contenido del artículo 77 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se advierte que el proceso electoral ordinario en nuestra entidad federativa se inicia en diciembre del año previo al de la elección, por lo que es procedente su presentación.



ATENTAMENTE

RAMÓN ALEJO PARRA OJEDA

C.c.p.- Recibido.

Handwritten signature and date:
09/11/20

DIPUTADA SOLEDAD SALDAÑA BAÑALEZ

Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Segundo Período de Receso del Segundo año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur

P R E S E N T E

El suscrito **Ramón Alejo Parra Ojeda**, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como de los artículos 58, 59, 60, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, por su conducto, presento a consideración de esa Soberanía Popular la siguiente **Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto** mediante la cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, además tomando en consideración que Son facultades del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 fracciones I, II, L y L de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, legislar en todo lo relativo al Gobierno del Estado, expedir Leyes, así como ejercer las facultades que le otorga la Constitución General de la República, expedir las Leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores, y las demás que señale esta Constitución, la General de la República y las leyes que de ellas emanen, expedir todas las leyes, logrando fortalecer las instituciones y las acciones, así como la actividad política tanto en su diseño, ejecución y evaluación del estado con perspectiva de actualización y modernización de las normas, y como referente la fecha de presentación, y que la presente iniciativa ciudadana propone diversas reformas, modificaciones y adiciones a la normatividad electoral de aplicación local, adquiere relevancia invocar además el artículo 105, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, y del contenido del artículo 77 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se advierte que el proceso electoral ordinario se inicia en diciembre del año previo al de la elección, en mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, respetuosamente el suscrito Ciudadano

Handwritten signature

Licenciado Ramón Alejo Parra Ojeda, someto la presente iniciativa ciudadana a la elevada consideración del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

“El espíritu de la presente iniciativa ciudadana en materia electoral, es para que los aspirantes a candidatos independientes que levanten la mano en Baja California Sur, ya puedan participar con una cancha más pareja y limpia en el próximo proceso electoral 2020 – 2021.”, y subsecuentes, y para que los ciudadanos que simpaticen con esta vía, tengan la certeza que el apoyo ciudadano y el voto en las próximas elecciones será válido y respetado, además de actualizar y modernizar el marco normativo local para que esta entidad federativa se encuentre acorde y a la vanguardia de las reformas y criterios que en materia electoral han determinado los máximos Tribunales en materia Electoral del País y de diversas entidades Federativas, incluida la máxima autoridad Federal en materia electoral y los organismos Locales electorales en recientes procesos electorales, pretendiendo que la normatividad sea más clara y justa, y evitar judicializar lo menos posible los procesos electorales, y se respeten los principios rectores en materia electoral como son el de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, prevalencia, pro persona, autonomía, independencia, máxima publicidad y equidad.

ANTECEDENTES GENERALES:

La redacción actual de la Ley Electoral vigente en la entidad, respecto a las Candidaturas Independientes desde su reforma en el año 2014 hace necesario su reforma y adiciones en diversos numerales, ya que actualmente su contenido pierde de vista que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 constitucional, y con diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los partidos políticos y los candidatos independientes son entes distintos que no pueden ser tratados de la misma forma. Incluso, en la actualidad no se debe de omitir y tomar en consideración los precedentes que dieron a las tesis: “CANDIDATOS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS” y “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. IGUALDAD RESPECTO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS, EN RELACIÓN CON PARTIDO POLITICO DE NUEVA CREACIÓN”.

ANTECEDENTES DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

A raíz de la reforma constitucional de nueve de agosto de dos mil doce, se reconoció un nuevo sistema respecto a la manera de acceder a cargos de elección popular: el registro de candidatas y candidatos dejó de ser un monopolio para los partidos políticos, instituyéndose la figura de las candidaturas independientes, como una alternativa para que la ciudadanía pudiera ser votada.

No obstante, dicha previsión constitucional no pudo ser aplicada de manera efectiva ante la falta de una instrumentación específica, lo que sucedió hasta la reforma de 2014 en donde, con la expedición de la LEGIPE, se establecieron reglas específicas para el acceso a cargos por esta vía.

En ese sentido, en el Libro Séptimo de la citada ley, se detallan las disposiciones que tienen por objeto regular las candidaturas independientes para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados y senadores del Congreso de la Unión, entre las que se encuentran las reglas aplicables al proceso de selección de candidaturas independientes, derechos y obligaciones, prerrogativas como el acceso a financiamiento y a tiempo en radio y televisión; y las disposiciones aplicables en materia de fiscalización.

En cuanto a las candidaturas independientes, considero que es necesario garantizar que éstas tengan posibilidades reales de éxito, de modo que su reconocimiento constitucional y legal se traduzca en su tutela desde una óptica material y no estrictamente formal.

Asimismo, en un estudio y análisis para mejor proveer de la presente iniciativa al resolver en las resoluciones números SUP-JRC-582/2015 y el SUP-REC-193/2015, se estableció que, si bien la diferente situación de candidatas y candidatos independientes, respecto de la de los partidos políticos ha quedado perfectamente expuesta por la Suprema Corte, lo cierto es que entre las candidaturas independientes y las postuladas por un partido político no existen diferencias materiales, de modo que el régimen jurídico que les sea aplicable durante las campañas electorales en las cuales contiendan debe ser análogo o, cuando mucho, razonablemente distinto.

Lo anterior, ya que si las personas que aspiran a un cargo de elección popular carecen de posibilidades reales de competir, y eventualmente ganar, se estarían produciendo tres violaciones de gran trascendencia para el orden constitucional:

I.- Se estaría vulnerando su derecho a ser votadas;

II.- Por otra parte se está afectando el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política distinta a la ofrecida por el esquema tradicional de los partidos políticos, trasgrediendo esa dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de elección popular; y

III.- Se estaría vaciando de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal forma que termina por hacerse nugatorio.

Es claro que, de conformidad con lo señalado en el artículo 41 Constitucional, los partidos políticos no son un fin en sí mismo, sino que su relevancia deriva del rol instrumental que tienen para la democracia, al permitir el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de modo que el diseño constitucional coloca a las personas en el centro de las normas y las instituciones.

Sería un contrasentido limitar las posibilidades reales de competir y ganar una elección de las y los candidatos independientes, en aras de favorecer a los partidos políticos como consecuencia de su rol para permitir el acceso ciudadano al poder público, ya que esto equivaldría a limitar un derecho ciudadano en aras de fortalecer el mismo derecho ciudadano ejercido por una vía distinta

El presente planteamiento que se somete a consideración de esta Legislatura se plantea de la siguiente manera:

SE PROPONE REFORMAR LA FRACCIÓN III, Y ADICIONAR SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV, XVI, XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ELECTORAL LOCAL

Con la presente iniciativa derivado de las modificaciones planteadas, se hace necesario para una mayor claridad incluir en el artículo 3 de la misma modificar e incluir las definiciones no existentes de los siguientes conceptos:

Candidato Independiente: El ciudadano mexicano residente en el Estado de Baja California Sur, que obtenga por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur la constancia de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Aspirante a Candidato Independiente: El ciudadano mexicano residente en el Estado de Baja California Sur que obtiene del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur su constancia que lo acredite como "Aspirante a Candidato Independiente", para participar en la etapa de obtención de apoyo ciudadano;

Aplicación móvil: Es La herramienta tecnológica desarrollada y administrada por el Instituto Nacional Electoral, para que las o los solicitantes de un instrumento de participación política recaben las manifestaciones del apoyo ciudadano necesario a favor de determinada candidatura independiente y que contendrá los requisitos establecidos en esta Ley, y en la normatividad electoral, así como para llevar un registro de los auxiliares/gestores y verificar el estado registral de las ciudadanas y los ciudadanos que respaldan las solicitudes, el Instituto dará amplia difusión a los ciudadanos del uso de la aplicación móvil para la obtención del apoyo Ciudadano.

La aplicación digital móvil será diseñada para que las y los aspirantes a una Candidatura Independiente, compartan bajo su responsabilidad la instalación y uso de la aplicación móvil, los cuales se deberán registrar para su debida instalación, capacitación y uso, el número de personas será el que consideren los aspirantes, los que de manera voluntaria los auxiliarán en la captación del apoyo ciudadano y/o registros, por lo que no está orientada para el público general, los usuarios deberán ser registrados y autorizados para obtenerla por los Candidatos Independientes o por conducto de sus representantes legales debidamente autorizados para ello;

Cédula de respaldo: Es el formato diseñado y autorizado por el Instituto para su uso solo en casos de excepción, que cuando menos contendrá los siguientes datos de los ciudadanos que manifiesten el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta Ley; nombre y apellidos completos sin abreviaturas, la firma en original en tinta azul, el folio o la clave de elector y el número identificador del reverso de la credencial, así como copia legible por el anverso y reverso de las credenciales para votar, la firma en original en tinta azul y el nombre completo del Aspirante a Candidato Independiente y el cargo para que se postula.

Proceso electoral: El conjunto de actos ordenados por la Constitución local y la ley electoral local, realizados por los órganos y las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos.

PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 199 Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 223 Y ADICIONAR LOS INCISCOS A) Y B) DEL MISMO ARTÍCULO 223 DE LA LEY ELECTORAL LOCAL

La ley electoral local, es un espejo de la Ley Federal en muchos aspectos, como lo es artículo 199 con el 399 de la LEGIPE el cual fue declarado inaplicable mediante Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, ya que se contrapone con lo establecido en los preceptos 407 y 408 de la citada ley federal, además de limitar el derecho de los ciudadanos que pretenden obtener su registro y la candidatura por la vía Independiente a ser votados, pues limita la capacidad financiera de los candidatos independientes y los coloca en un plano de desigualdad frente a los partidos políticos, contraviniendo el principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional. Por tanto, se solicita la modificación de diversos preceptos por considerarse de contenido obsoleto y oscuro y que colocan en un plano de afectación, por falta de equidad y desigualdad en la contienda entre candidaturas independientes y aquellas postuladas por la vía partidista.

Por lo que considero que resulta procedente la modificación del artículo 199 de la ley electoral local, que establece la regla sobre el límite de financiamiento privado que pueden

recibir los candidatos independientes, consistente en el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate.

Artículo 199.- Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo Estatal por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado.

El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al diez por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

Por su parte, con respecto al financiamiento privado, pueden recibirlo siempre y cuando sea de origen lícito, integrándose por autofinanciamiento del candidato o candidata independiente y por aportaciones de sus simpatizantes, y al respecto existen ciertas normas de control establecidas para el financiamiento privado de estas candidaturas.

Derivado de que como ya se expuso en líneas anteriores, que dicho límite ya ha sido por los altos Tribunales Federales su inaplicabilidad y han sido debidamente acatadas las resoluciones por el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a partir de un análisis de proporcionalidad que evidencia la vulneración a la equidad en la contienda, frente a los candidatos de partidos políticos, y en el caso de campañas inmediatas anteriores los montos no son los actuales.

FINANCIAMIENTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Por su parte, a partir de la reforma electoral de 2014, con la inclusión de las candidaturas independientes, se contempló la determinación de financiamiento público para estas figuras el cual, atendiendo a su naturaleza, únicamente puede ser utilizado para los gastos de campaña.

La incorporación de las candidaturas independientes tuvo algunas variantes, respecto del financiamiento que pueden recibir, en relación con los partidos políticos. Por ejemplo, mientras los partidos políticos pueden destinar recursos públicos para los procesos de selección internos, los candidatos independientes no, para su etapa de obtención de apoyo ciudadano.

No obstante, en atención al principio de equidad, sí se contempla la prerrogativa de acceso al financiamiento público para la etapa de campaña.

En ese sentido, para la distribución de dicho financiamiento, se determina en la Ley electoral vigente en la entidad en sus artículos 223, 231, 232, 233 y 234, al establecer que los Candidatos Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, en su conjunto, y que



deben considerarse todas las candidaturas independientes en su conjunto, como un partido de nuevo registro, de lo que se distribuirá el monto total que corresponda, en tres partes iguales según el tipo de cargo a elegir: de la siguiente manera:

- a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los Candidatos Independientes al cargo de Gobernador del Estado;
- b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de integrantes de Ayuntamientos, y
- c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputado.

Además, se especifica que, en caso de que sólo exista una candidatura postulada a uno de los tres tipos de cargos, esta no podrá recibir más del 50% del monto total que correspondería a ese tipo de cargo.

De lo anterior se puede advertir que, el monto que por concepto de financiamiento público corresponda a una candidatura, dependerá del número de candidaturas independientes registradas por cada tipo de cargo, es decir, a mayor número de candidaturas independientes, menor será el monto a distribuir entre los involucrados.

Además, en el artículo 234 de la ley electoral del estado, se establece al igual que los partidos políticos, los candidatos independientes tienen la obligación de devolver al Organismo Público Local Electoral que corresponda, el monto total del financiamiento público que no utilizó para su campaña, según lo dispone el artículo 222 Bis del Reglamento de Fiscalización, y el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos.

Actualmente, la legislación local no concede a Los Candidatos Independientes el derecho a renunciar por escrito ante el Instituto al derecho de recibir financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, para sus gastos de campaña, y se esta proponiendo en la presente iniciativa este derecho, para quien no desee hacer uso de las prerrogativas o recursos públicos pueda renunciar a ellos.

Al respecto existen ciertas normas de control establecidas para el financiamiento privado de estas candidaturas, entre las cuales se encuentran:

- Prohibición de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por cualquier persona física o moral.
- No podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

- Para el manejo de los recursos de campaña electoral, se deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiere esta Ley; todas las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria.
- Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica.
- No podrán recibir en propiedad bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que reciban.

Es importante apuntar que, la integración mixta del financiamiento de estas candidaturas, ha hecho necesario diversos pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales y constitucionales en torno a si resulta aplicable en estos casos el principio de prevalencia del financiamiento público.

En las sentencias de esta Sala Superior SUP-REC-193/2015 y SUP-JRC-582/2015, las cuales dieron origen a la Tesis XXI/2015, se ha sostenido que el principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los privados no resulta aplicable a las candidaturas independientes, puesto que el legislador estableció el principio en cuestión, exclusivamente para los partidos políticos.

Finalmente, debe decirse que estas candidaturas deben presentar directamente los informes de campaña sobre el origen y monto de ingresos como una obligación legal, al igual que los partidos políticos, para que sean verificados los ingresos y egresos de las candidaturas independientes, así como la veracidad de sus reportes y de observar los hallazgos detectados durante el procedimiento de revisión.

Por lo que considero de no realizarse tal reforma, se estaría violentando el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, con lo que permitirá que las candidaturas independientes recauden mayor cantidad de financiamiento privado, derivado de la aplicación estricta del artículo controvertido.

Como se ve, en el contenido del referido artículo 199 Y 223 vigentes en la ley electoral local, con la aplicación de dicha regla se estaría ante una franca restricción, en la medida en que establece un límite al financiamiento privado para las campañas de las candidaturas independientes, lo que constituye una limitación fijada respecto al derecho humano de ser votado.

Ello es seria porque, quienes obtienen una candidatura tienen derecho a realizar actos proselitistas tendentes a conseguir el voto, cuya realización serían imposible si no se dispone de recursos económicos y, en la medida en que puedan usar mayor o menor cantidad de recursos privados, se podrá alcanzar, o no, el tope de gastos de campaña.

Este extremo demuestra que dicho límite es en sí mismo una restricción ya que, si los candidatos independientes tienen el derecho de allegarse de recursos en la etapa de campañas, el límite que impone el legislador a los provenientes de particulares, restringe tal derecho.

Por lo que debe considerarse, una vez que se ha expuesto que, en este caso, estamos frente a una restricción fijada por el legislador de ese entonces y que sigue vigente y con validez dicha restricción, que su aplicación considero no es proporcional, y la presente iniciativa, tiene como objetos subsanar un fin legítimo en la restricción concreta de Imponer límites al financiamiento privado a los candidatos independientes para preservar la equidad en las contiendas electorales, fortalecer la licitud en el origen de los recursos que soportan una campaña; y otorgar autonomía de quienes son elegidos por el voto ciudadano.

El artículo 35 de la Constitución, fracción II, establece el derecho de los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, a ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

La restricción se encuentra en el marco legal del financiamiento de las candidaturas independientes, es decir, en el artículo 199 de la Ley electoral local, que es donde se determinan las reglas y condiciones bajo las cuales se norma dicha figura.

Por ello, se advierte que la restricción legislativa vigente es admisible al fijar cuáles son los requisitos y condiciones a que hace referencia el citado artículo 199.

Ello, porque si los candidatos independientes en campaña contaran con recursos indeterminados ello abriría la posibilidad de que uno de ellos cuente con recursos diametralmente mayores frente a sus demás contrincantes y con ello, contara con más posibilidades para promover el voto, circunstancia que incide en el resultado.

Pero también, la medida procura que los candidatos independientes no se vean comprometidos por determinados grupos de poder que financien sus campañas electorales, así como aminorar los riesgos de que ingresen recursos de procedencia ilícita o desconocida. De esta manera, se establece una garantía de independencia de las candidaturas ciudadanas frente a actores externos.

En tal virtud, nuestra propuesta atiende a un fin legítimo que es vigilar la equidad en la contienda, lo que debe garantizarse no sólo entre candidatos independientes, sino entre estos y los postulados por los partidos políticos.

En el caso, al ser el financiamiento naturalmente medible en dinero, el establecimiento de un límite a las aportaciones privadas es una medida idónea para salvaguardar la equidad en la contienda a partir de los recursos que utilicen los candidatos independientes.

Al respecto, considero idóneo que si se puedan fijar límites a las aportaciones de carácter privado que puedan recibir de los simpatizantes, puesto que con dicha medida se establece un parámetro que restrinja el ingreso desmedido de recursos a las campañas, lo anterior además para no vulnerar el régimen de rendición de cuentas que impera en el modelo de fiscalización actual.

Considero la necesidad de la reforma, ya que, al igual que a los partidos políticos, se fijan límites para el financiamiento privado, de tal suerte que con el límite fijado a quienes compiten por la vía independiente se impone un equilibrio necesario a efecto de que la competencia se dé con cierta igualdad de posibilidades, y permita a la autoridad electoral a través de los instrumentos de fiscalización, salvaguardar la equidad en la contienda, ya que debe existir certeza en los montos que puede recaudar un independiente para efectos de la fiscalización de sus recursos y vigilando que no puedan recibir un monto que implique inequidad en la contienda.

Derivado de los razonamientos anteriormente expuestos considero que, si bien la fijación de límites de financiamiento privado atiende a un fin legítimo, resulta idónea y necesaria, pero no considero idóneo el establecimiento del 10% como límite, ya que considero no resulta proporcional en sentido estricto, toda vez que en los procesos electorales locales, donde contienden candidaturas de partidos políticos y candidaturas independientes, todas estas candidaturas, lo ideal es que deben participar en igualdad de circunstancias, partiendo de las diferencias que cada una de las figuras supone.

Los partidos políticos cuentan con estructuras consolidadas, que han sido sujetas al parámetro de aprobación ciudadana mediante los procedimientos o condiciones establecidos en la Constitución, así como en la Ley de Partidos.

Ello significa que cuentan con un respaldo ciudadano previo a los procesos electorales, que los habilita a dar cumplimiento a los fines y objetivos que constitucional y legalmente tienen encomendados, los cuales atienden a cuestiones diversas a las candidaturas independientes.

Por su parte, las candidaturas independientes surgen con la finalidad de evitar el monopolio de los partidos políticos como únicos medios de acceso al poder, posibilitando a la ciudadanía en general el ejercicio del derecho a ser votado, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que establece la ley.

Dentro de ese conjunto de condiciones se encuentra el cumplimiento a las obligaciones que, en materia de ingresos y gastos tienen encomendadas, frente a las cuales se tienen diversas prerrogativas como lo es, el acceso al financiamiento público y privado.

Tales prerrogativas, aunque en esencia también lo son de los partidos políticos, suponen diferencias sustanciales que atienden a la naturaleza que se ha señalado para cada figura, y que los distingue, por lo que mientras un partido político puede recibir mayor

cantidad de recursos públicos, ello tiene sustento en que sus fines están circunscritos a todo el ejercicio de manera ordinaria y periódica.

Ahora bien, respecto del financiamiento público para la obtención del voto, también los partidos cuentan con una bolsa mayor que la de un candidato independiente, sin embargo, no debe perderse de vista que aquellos deben velar por la totalidad de las candidaturas postuladas, respecto de los diversos procesos electorales en que contienden.

Tal parámetro impide comparar de manera efectiva las figuras de los partidos políticos y las candidaturas independientes, pues en un cargo al que contienda un candidato independiente, con cierto financiamiento público y privado, puede no ser del interés de un partido político por competitividad, lo que significará que, posiblemente, el partido político otorgue menor cantidad de recursos al candidato que postula.

Sin embargo, hay un parámetro que sirve de base para medir la equidad en la contienda, y es el tope de gastos de campaña.

Este límite de gasto que se fija para cada campaña involucrada en un proceso electoral, tiene como objetivo permitir a todos los contendientes participar en un marco de igualdad respecto de los recursos que pueden emplear en la campaña, con lo que se busca garantizar la equidad en la contienda, al impedir que un candidato, sin distingo de su origen partidista o independiente, pueda gastar más que otro.

Bajo tales conclusiones, todos los topes de gasto privilegian la equidad, principio en que se encuentran sustentados. No obstante, frente a los topes de gasto, se encuentran los límites de ingreso.

En el caso del financiamiento público, no se habla de un límite, sino del monto a que se tiene derecho, partiendo de las fórmulas establecidas legalmente. En cambio, para el financiamiento privado sí se contiene un límite, a fin de impedir que actores ajenos a los sujetos obligados incidan en la contienda, beneficiándose del resultado y afectando, por lo tanto, la independencia de los actores públicos que accedan al poder.

Como se dijo, en el caso de las candidaturas partidistas, éstas pueden erogar recursos suficientes para alcanzar el tope de gastos de campaña, pues los montos de financiamiento público y privado resultan mayores que éste. Lo que estará condicionado a la estrategia política de los partidos, mas no a una cuestión jurídica previamente delimitada.

Por su parte, las candidaturas independientes sí se encuentran en una situación diversa, ya que los montos de financiamiento público no resultan suficientes, respecto del tope de gastos de campaña, motivo por el cual se hace necesario que el financiamiento privado cubra la limitante referida, a efecto de hacer competitiva la candidatura en condiciones de equidad, frente a la de los partidos políticos.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la problemática gira en torno a la cantidad de recursos que se pueden obtener por concepto de aportaciones de simpatizantes y de los propios candidatos, puesto que la norma establece que el límite debe fijarse a partir del tope de gastos de campaña, tasando con un diez por ciento dicha restricción.

Tomando como referencia para la presente reforma que se plantea en esta iniciativa a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2016, esencialmente concluyó que *“el límite para el financiamiento privado de los candidatos independientes, previsto en el artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en el cual se prevé que éstos no podrán rebasar el 50% del tope de gasto de campaña para candidatos independientes de la elección de que se trate, resulta una medida proporcional y equitativa en tanto que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, el cual suele ser significativamente inferior al que es otorgado a sus similares que compiten postulados por un partido político o coalición”*.

En la ejecutoria de dicha contradicción, se razonó que las candidaturas independientes (consideradas como partidos políticos de nueva creación) deben tener las mismas posibilidades de contender y tener éxito en las campañas electorales en las que participen respecto de las candidaturas postuladas por partidos políticos, más allá de las diferencias latentes que existen como son el acceso a radio y televisión, estructura partidista, etc.

Además en la citada resolución, se invocó el Código de buenas prácticas en materia electoral de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, popularmente conocida como Comisión de Venecia, que contiene una serie de directrices

En ese sentido, se razonó que todos los candidatos deben participar en igualdad de circunstancias para tener posibilidades de éxito en la elección en la que contiendan, lo que tampoco significa que todos deban contar con los mismos recursos para participar en las elecciones, pues, las prerrogativas que otorga el Estado obedecen, en cada caso, a las circunstancias en que cada contendiente participa.

Igual circunstancia se presenta respecto de los candidatos independientes, toda vez que éstos, de conformidad con la normativa constitucional, convencional y legal a la que se ha hecho referencia, participan en los comicios electorales de acuerdo a su calidad de independientes, bajo condiciones diferenciadas respecto de los candidatos de partido, lo que no implica que participen en condiciones inequitativas.

Si bien la jurisprudencia derivada de la contradicción de criterios referida, estaba relacionada con una legislación local que disponía un límite tasado mayor al federal (cincuenta por ciento del tope de gastos de campaña), sirve como referencia al caso concreto por los razonamientos ahí vertidos, dado que reconoció las diferencias sustanciales que se presentan entre partidos políticos y candidaturas independientes.

Por otra parte, la misma Sala Superior, en la tesis XXI/2015, señaló que los partidos políticos y los candidatos independientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el marco normativo de los primeros no es aplicable a los segundos.

Con dicho criterio se logró que los candidatos independientes estuvieran en posibilidad de acceder a un financiamiento privado superior al recibido por financiamiento público, toda vez que, como se precisó en los párrafos precedentes, éste último es significativamente inferior al que reciben los partidos políticos.

De tal suerte que, el financiamiento público que reciben los candidatos independientes es significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, por lo que es razonable que los candidatos independientes tengan la posibilidad de acceder a un financiamiento privado sustancialmente mayor al que reciben por concepto de financiamiento público, con lo cual tienen la posibilidad de contender en condiciones de igualdad.

Concluyendo en la resolución señalada que se advierte que ninguno de los actores en ese asunto alcanzaba siquiera la posibilidad de erogar el cincuenta por ciento del tope de gastos de campaña, lo que los colocaba en una desventaja inminente frente a las opciones partidistas, motivo por el cual se advierte que la inequidad notoria hace necesaria la inaplicación de la norma en ese asunto controvertida, y es aquí donde encuentra lógica la conclusión a que se arribó en la Contradicción de Criterios 2/2016, donde se consideró que el límite de un 50% en las aportaciones privadas a los candidatos independientes, se estimó proporcional, no obstante que dicho límite eventualmente se materializara en un trato diferenciado en cuanto al monto del que podrían disponer los independientes frente a los candidatos postulados por partidos políticos, entonces si el 50% no devenía palmariamente desproporcional es que debió hacer prevalecer la medida, dado que fue establecida en ejercicio de su libertad configurativa y facultad para establecer restricciones.

Tal situación no acontece en el caso de la normatividad sobre la que se presenta esta iniciativa, puesto que la regla del diez por ciento fijada por el legislador local, no soporta racionalidad ni proporcionalidad que permita hacer que continúe su vigencia y aplicación.

Señores Legisladores, como fue evidenciado líneas arriba, el límite equivalente al diez por ciento del tope gasto de campaña, para candidatos independientes les genera desventaja frente a los demás competidores partidos políticos, pues legalmente estos cuentan con posibilidad de erogar gasto hasta por el total del tope de gastos de campaña fijado.

Tomando también en consideración como análisis para arribar y desarrollar la presente exposición de motivos, en el sistema internacional de derechos humanos, se encuentra reconocido a los Estados la facultad de establecer restricciones a derechos humanos, siempre que sean producto del que hacer material y formalmente legislativo. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derecho Humanos al interpretar el artículo 12.3 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y como se precisa reformar el numeral propuesto para dejar de lado el límite del 10%, simple y llanamente, y sin fijar otro que resulte proporcional, podría materializar la vulneración al principio de equidad en la contienda, así como el de certeza al no definir a las candidaturas independientes cuál es el monto que tienen permitido recibir por ese concepto, a sabiendas, que las candidaturas independientes estarían sujetas al uso de menores recursos que los candidatos, pues ello se traduciría en una restricción.

En todo caso, se propone fijarse nuevas que tenga la finalidad de evitar un gravamen a la equidad en la contienda, y otorgándole a esta legislatura la posibilidad de tomar conciencia reformando, para que propicie la igualdad de trato entre quienes compiten en la elección respectiva.

La presente iniciativa, a efecto de no vulnerar el marco jurídico de la fiscalización y buscando no propiciar la injerencia de terceros en la contienda de tal forma que comprometan la independencia de los actores políticos, se considera necesario determinar límites individuales de aportaciones privadas que realicen los simpatizantes y candidatos independientes de manera específica, aunado a que dicha medida permite evitar que una sola persona genere todo el impacto económico en las aportaciones que reciba una candidatura independiente, y la propuesta va en el sentido de tomar en cuenta las reglas fijadas en la legislación aplicable a aportaciones de simpatizantes.

Se tiene que reconocer que nuestra legislación local en materia electoral, respecto de los candidatos y precandidatos, no se menciona en específico un límite individual, por lo que considero que el límite individual que se debe establecerse en la Ley, y que debe fijarse considerando, por una parte, que la participación de las candidaturas independientes está ceñida al período de campaña electoral y, por otra, el tipo de cargo al que se contienda en atención a que los toques de gastos son proporcionales en relación con cada cargo, por lo que resulta necesario establecer un límite para las aportaciones que cada candidatura puede hacer a sus campañas, para lo cual sugiero tomarse como referencia el porcentaje referido en el artículo 56 de la Ley de Partidos, a fin de se genere proporcionalidad entre la capacidad económica de cada candidatura independiente.

Por ello, el límite individual de aportaciones que se propone con esta iniciativa es con la finalidad de brindar la posibilidad a los simpatizantes a las candidaturas independientes, de que sus aportaciones sean el equivalente al 0.5 por ciento del tope de gastos de la campaña de que se trate, y, el límite individual de aportaciones que podrán realizar las candidatas y candidatos a sus campañas, sea el equivalente al 10 por ciento del actual tope de gastos de su campaña al ser este un parámetro racional y objetivo que garantiza la equidad entre todas las candidaturas.

Dichos montos se compondrán por las aportaciones realizadas tanto para el período de obtención de apoyo ciudadano como para la campaña en caso de lograr su constancia de Candidato Independiente.

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS

Como comparativo para la presente exposición de motivos que se plantea, se debe analizar la legislación sobre financiamiento público a partidos políticos y candidatos, limitada inicialmente a cubrir los gastos de éstos en las campañas electorales, evolucionó hasta llegar al sostenimiento de la vida permanente de los aparatos, atendiendo a la idea de que éstos siempre están en campaña.

Es partir de 1986, que aparece el financiamiento público en la Constitución. En ese año, el financiamiento tenía un objetivo eminentemente electoral y fue progresando en posteriores reformas a financiar diversos rubros de las actividades partidarias.

El modelo mixto de financiamiento establecido en el país en 1996, apostó a entregar montos generosos de dinero público, de manera permanente, a los partidos políticos para propiciar condiciones de igualdad, inyectar transparencia y fortalecer su autonomía frente a los intereses privados, corporativos o incluso delincuenciales, que eventualmente pueden subyacer a las aportaciones privadas.

El artículo 41, párrafo segundo, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley debe garantizar a los partidos políticos nacionales que cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, entre los cuales se encuentra el financiamiento público sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Asimismo, desde la Constitución y en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos se dispone la forma en que se habrá de calcular el monto total que corresponde a los partidos políticos nacionales, así como la distribución que se debe hacer de los recursos a dichos partidos.

El órgano competente para determinar estos montos de financiamiento, aplicando las fórmulas respectivas, es el Consejo General, quien debe realizar el ejercicio a partir del corte del padrón electoral al mes de julio del año anterior.

A la par del financiamiento público, se encuentra el de origen privado, consistente en los ingresos que pueden recibir los partidos políticos, proveniente de fuentes ajenas al Estado. Fue con la reforma constitucional y legal de 1993 cuando se estableció, además de las disposiciones que regulaban el financiamiento público directo a los partidos políticos, normas relativas al financiamiento privado.

Por su parte, a fin de ejercer control y restringir la injerencia de los actores privados en las decisiones o acciones de los partidos políticos o candidatos, dicha Ley determina un límite individual anualizado para las aportaciones de los simpatizantes, con lo que se garantiza que ninguna persona física pueda aportar a los actores políticos más del punto cinco por ciento del límite anual establecido para las aportaciones de simpatizantes.

Por cuanto a las otras modalidades de financiamiento privado, la norma no establece límites específicos.

Finalmente, otra medida de control implementada desde la Constitución para los partidos políticos consiste en que los recursos públicos deben siempre ser mayores que los privados, lo que se conoce como principio de prevalencia, también conocido como de preeminencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la razón fundamental de establecer la tal principio se sustenta en la preocupación social de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.

Cabe mencionar que, al corresponder el financiamiento a una competencia mixta, los Organismos Públicos Locales Electorales son quienes fijan los montos, tanto de financiamiento público, como los límites del privado, los cuales se encuentran incluidos en las prerrogativas de los partidos políticos.

USOS DE APLICACIÓN DIGITAL

Tomando como referencia que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció desde el 11 de septiembre del año 2017 el plazo para que los ciudadanos sin partido que buscarán una candidatura a la Presidencia de la República, una diputación federal o senaduría, para competir en los pasados comicios federales realizados el 1 de julio de 2018, registrarán su "Manifestación de Intención".

En este proceso la tecnología digital jugó un nuevo papel, pues el apoyo ciudadano fue recabado a través de una aplicación para dispositivos móviles que fue habilitada por el INE, para terminar con el uso de hojas de papel para registrar las firmas y entregar las fotocopias de las credenciales de elector de las personas que apoyan la postulación de los aspirantes.

Entre las ventajas que ofrece el uso de tecnologías digitales app, está el que hay miles de smartphones y tabletas en el estado, por lo que existen más posibilidades de acceder a uno de estos teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas que a una fotocopidora.

Otro punto a favor será que los promotores y candidatos no se quedarán con una fotocopia de la credencial para votar de los ciudadanos que apoyen a algún independiente, sino que



la información se remite al Instituto, con lo cual también se protegen los datos personales de los ciudadanos, incluso si el dispositivo fuera robado o extraviado, esta información no es accesible.

“En la presente iniciativa se propone en diversos artículos que se utilice la aplicación digital de las más modernas y actualmente ya en operación, toda vez que éste será un mecanismo que otorgará “mucho más transparencia y certeza para las propias candidaturas”, además sobre el uso de aplicación digital, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-841/2017 y acumulados, la Sala Superior confirmó, en general, los Lineamientos de Verificación y, en particular, se pronunció sobre la finalidad e importancia en el uso de la APP para la obtención de apoyos ciudadanos por los aspirantes a candidaturas independientes, destacando que se trata de un mecanismo que:

- Dota de mayor agilidad la obtención, resguardo y verificación de los apoyos que se emiten en favor de quien aspira a una candidatura independiente.
- Facilita la acreditación de un número o porcentaje determinado de cédulas de respaldo ciudadano.
- Permite una labor más eficiente y rápida al recabar el respaldo ciudadano y, en consecuencia, proporciona mejores elementos para lograr una mayor participación ciudadana.
- Facilita conocer, a la brevedad, la situación registral en lista nominal de las personas que brindaban el apoyo.
- Genera reportes preliminares para verificar el número de apoyos ciudadanos recibidos por las y los aspirantes.
- Tiende a evitar el error humano en el procedimiento de captura de la información.
- Reduce los tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano.
- Garantiza que el apoyo que se obtenga de un determinado ciudadano no se utilice por otros candidatos independientes, o que se utilicen apoyos de personas que no existen o que no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la ciudadanía en su conjunto y afectan la credibilidad del sistema.
- Permite maximizar la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles.
- Permite la remisión de la información en tiempo real a la autoridad a efecto de que sea verificada rápidamente.



- Incrementa la certeza de que los datos personales que sean recabados estén protegidos al borrarse inmediatamente, una vez que son enviados por el dispositivo.

Lo que solía ocurrir con mucha frecuencia eran varias hipótesis, una de ellas y muy grave, es que con anterioridad al inicio del proceso electoral, aprovechándose de la necesidad de la gente humilde a través de la entrega de apoyos y ayudas sociales y asistenciales, directamente quien pretendía contender por la vía independiente, o por conducto de ciudadanos o en contubernio con grupos o partidos políticos, o derivado de procesos anteriores, Asociaciones reales o ficticias, se solicitaba a los ciudadanos a los que se les prometía gestiones, o que se les beneficiaba con la ayuda y se obtenían con engaños mañosamente cientos o miles de copias de la credencial para votar, o se retenían las mismas, incluso, se captaban cientos o miles de imágenes en fotografía por ambos lados, y con posterioridad eran utilizadas sin el consentimiento y menos conocimiento de los ciudadanos como respaldo de apoyo ciudadano para obtener fraudulenta y dolosamente del Instituto la constancia de candidato Independiente, realizando además una falsificación de la firma de esos ciudadanos, o lo que pasaba además, que el último día llegaban las y los aspirantes con 10 o 20 cajas con firmas, y después el Instituto con muy poco tiempo tenía que empezar a capturarlas, y debido a esto había muchos errores de llenado y captura, y el proceso de validación no era muy preciso, ya que lo hacían como estrategia, ya que se reducía mucho el plazo para que las y los aspirantes ejercieran su derecho de garantía de audiencia. En cambio con el uso de la aplicación si así lo desean, cada noche o cada dos días o cuando cada Aspirante, voluntario, asistente o promotor vaya mandando sus apoyos ciudadanos, se van a validar automáticamente por el registro y, en consecuencia las y los aspirantes van a saber cómo van avanzando, cuáles fueron válidas, cuáles no y las razones, ya que los promotores autorizados podrán enviar al Instituto sus respaldos, con los datos del móvil o por WiFi.

La *app* permitirá recabar apoyos incluso de los Sudcalifornianos que residan en poblaciones alejadas, ya que la aplicación será útil en el 96 % de los casos.

La aplicación actualmente utilizada y autorizada por el Instituto Nacional Electoral ya ha sido operada, utilizada en pasados procesos electorales nacionales y locales en diversas entidades federativas, y actualmente está disponible para diversos sistemas operativos, incluso se pueden consultar tutoriales de capacitación en línea.

El INE ya ha ofrecido esta *app* a los organismos locales electorales de las entidades en pasados comicios, y se han utilizado con grandes resultados cuando se han renovado puestos de gubernatura, diputaciones y alcaldías.

LOS PLAZOS Y PROCESOS

La presente iniciativa plantea también, establecer con claridad los plazos para quienes busquen presentar su "Manifestación de Intención" para obtener la constancia de

Candidato Independiente para los cargos Gobernador, Diputado Local y Alcalde, según sea el caso en el próximo proceso electoral.

Los aspirantes deberán presentar el Acta Constitutiva de una asociación civil creada para gestionar su campaña, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la cuenta bancaria en la que se recibirá el financiamiento privado y público y en la presente iniciativa se plantean reformas a diversos artículos con la intención de brindar más claridad a los requisitos y los plazos.

De ser avalados los requisitos, el Instituto emitirá la constancia con la cual, ya podrán iniciar la recolección de firmas de apoyo ciudadano en los porcentajes que se requieren para concretar sus candidaturas.

Derivado de la pandemia Covid 19 que azota al mundo, a nuestro País y por obvio a nuestra entidad, y que si bien es cierto hemos iniciado hace semanas la activación cotidiana a lo que se ha denominado la nueva normalidad, también es cierto que prevalecerán y se incrementarán los riesgos de contagios y por lo tanto los ciudadanos deberán seguir adoptando medidas sanitarias, entre otras la sana distancia, por lo que en esta iniciativa se propone modificar y establecer los plazos para recabar las firmas para obtener el apoyo ciudadano, ya que con esta propuesta se estaría evitando el riesgo de posibles contagios entre los ciudadanos y los aspirantes y sus colaboradores, y pudiera además ser una barrera que impediría lograr la obtención del referido apoyo.

De conformidad con los artículos 194, 195 y 196 de la Ley Electoral vigente se establece que para la candidatura de Gobernador del Estado, se debe de obtener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2.51% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos nueve distritos electorales, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

Para fórmula de diputados de mayoría relativa, se debe de obtener cuando menos la firma de una cantidad de una cantidad de ciudadanos equivalente al 5% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 2% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Para integrantes de Ayuntamientos, se debe de obtener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 5% de la lista nominal de electores correspondiente a la circunscripción territorial del municipio que corresponda, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 3% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

SE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY PARA ADELANTAR EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

Se propone modificar el artículo 77 de la Ley, toda vez que actualmente nuestra legislación establece que el proceso electoral ordinario se inicia en diciembre del año previo a la elección, no siendo muy claro el artículo respecto a la fecha del señalado mes, además ante la contingencia sanitaria que enfrenta el país derivada de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19) y toma previsiones para que el Instituto pueda “arrancar el que será el proceso electoral más grande de la historia en nuestro país y en nuestra entidad no será la excepción, pero se deberán establecer las medidas sanitarias, condiciones y las previsiones suficientes”, no obstante lo anterior, de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de salud la pandemia no será erradicada durante el tiempo que dure el proceso electoral y ante la situación de posibles riesgos de contagios entre los integrantes de la autoridad electoral, ciudadanos, candidatos, consejeros y representantes de partidos políticos, etc., considero que será muy difícil la tarea del árbitro electoral en sus tareas durante este proceso electoral, por lo que considero que se requiere adelantar quince días el inicio del señalado proceso, y reformar el citado artículo 77 de la normatividad local para establecer como fecha de inicio la tercera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección.

Además, tomando como referencia que el Instituto Nacional Electoral por Ley arrancara formalmente con el inicio del proceso electoral federal la primera semana de septiembre próximo, y en el caso nuestro estaríamos iniciando de acuerdo a nuestra legislación tres meses después.

Además de la contingencia sanitaria que enfrenta el país derivada de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), el Instituto debe llevar a cabo la organización del proceso electoral, que, por la complejidad que el mismo reviste, tanto en términos del diseño normativo y por la cantidad de actividades que requieren un despliegue técnico y operativo, demanda de una mayor anticipación, con independencia de los tiempos difíciles que seguramente vendrán y que van a requerir alcanzar mayores miras, no solamente de nuestra clase política, sino también de cada ciudadana y ciudadano para defender la democracia, en estos tiempos en los que lamentablemente la pandemia está siendo motivo de grandes conflictos y atrasos, lo anterior además para que las elecciones se lleven a cabo puntualmente el próximo año para la renovación pacífica y democrática.

SE PROPONE LA MODIFICACION Y ADICIÓN AL ARTICULO 189

Derivado que tiene un error el artículo 189 de la ley electoral local desde su reforma en el año 2014, al establecer en su redacción que el consejo General emitirá en la cuarta semana del mes de octubre del año previo a la elección, la Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como Candidatos Independientes, error que señalo porque se estaría emitiendo una convocatoria antes del inicio del proceso electoral, es decir la citada convocatoria se emitiría por ley fuera del periodo del proceso electoral, contraponiéndose

a lo establecido en la redacción actual y vigente del artículo 77 de la ley local de la materia que nos ocupa, que señala como inicio del proceso electoral el mes de diciembre del año previo a la elección, proponiendo de nuestra parte en caso de aceptarse la modificación al artículo 77 antes planteada, la emisión de la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como Candidatos Independientes, se emita a más tardar en la tercera semana del mes de noviembre previo a la elección, sugiriéndose incluir además de esta modificación la adición de determinar, los topes de gastos de recursos privados para la obtención del apoyo ciudadano, en los términos establecidos en la presente ley que pueden erogar los aspirantes y la determinación del uso de los formatos o aplicación móvil digital para recabar el apoyo ciudadano que determine el Consejo, y la obligación al Instituto de dar amplia difusión a la Convocatoria, así mismo, la obligación a cargo del Instituto de emitir los lineamientos de orden público, de observancia general y obligatoria en todo el Estado de Baja California Sur y, que tendrán por objeto implementar el uso de la solución tecnológica (aplicación móvil), desarrollada por el Instituto Nacional Electoral o una similar, para la captación del apoyo ciudadano para el inicio de los instrumentos de participación política que son competencia del Instituto Estatal Electoral, el régimen de excepción en su caso; y la modalidad del formato de recolección de apoyo ciudadano tradicional, solo para aquellos casos en que aplique el régimen de excepción.

SE PROPONE REFORMAR LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SE PROPONE ADICIONAR UN CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY

Se propone reformar el párrafo primero, derivado del uso de la aplicación digital que se propone y que se relaciona en la propuesta de diversos artículos, además del caso de excepción de la cedula digital.

Se propone reformar el párrafo segundo para ampliar el plazo a setenta días para la obtención del apoyo ciudadano a los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Gobernador del Estado, ya que actualmente cuenta con sesenta días, siendo que se tiene que recorrer en busca de la obtención del apoyo ciudadano en toda la geografía estatal, y en concordancia, mas no similitud, el Instituto Nacional Electoral otorga 90 días a los aspirantes a Senador de la Republica y 60 días a los aspirantes a candidatos a diputados federales por cada circunscripción territorial federal, y el periodo que se propone es el comprendido del día 22 de diciembre al día 1 de marzo del año de la elección.

Se propone reformar el párrafo tercero para reducir el plazo a cincuenta días para la obtención del apoyo ciudadano a los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Integrante de Ayuntamiento, ya que actualmente cuenta con sesenta días, siendo que se tiene que recorrer con el auxilio de los integrantes de la planilla de titulares y suplentes en busca de la obtención de apoyo ciudadano, solamente la geografía territorial del municipio que se trate, y el periodo que se propone es el comprendido del día al día 9 de febrero del año de la elección.


Se propone adicionar el párrafo cuarto para reducir el plazo a treinta y cinco para la obtención del apoyo ciudadano a los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Diputado de Mayoría Relativa, ya que actualmente cuenta con sesenta días, siendo que se tiene que recorrer con el auxilio de los suplentes en busca de la obtención de apoyo ciudadano, solamente la geografía territorial del distrito electoral que se trate, y el periodo que se propone es el comprendido del día del día 22 de diciembre al día 25 de enero del año de la elección.

Además, debido a que la conclusión de la obtención del apoyo ciudadano será en diferentes fechas en algunos casos con 20 días de diferencia, la autoridad electoral podrá verificar y validar debidamente los resultados entregados por los aspirantes, y podrá otorgar plazos de solventación, y se evitará aglomeración de personas y candidatos en un solo día.

Por último, previendo posibles complicaciones por el COVID, se sugiere reformar el párrafo quinto, para facultar al Consejo General a realizar ajustes a las fechas de los periodos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los párrafos anteriores. Cualquier ajuste que el Consejo Estatal realice deberá ser difundido ampliamente.

SE PROPONE REFORMAR EL PRIMER PÁRRAFO, Y ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 193 DE LA LEY

Se sugiere reformar el primer párrafo del artículo 193, para ampliar la definición de actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, e incluir las reuniones privadas, entrevistas y pláticas en radio y televisión, así como el uso de publicidad y propaganda impresa o por cualquier medio digital, el perifoneo, pero se agrega también la limitación de que estos actos no constituyan actos anticipados de campaña, se agrega la palabra plazos señalados por esta ley, y se propone se autorice establecer módulos en lugares públicos o privados, así como el uso de todo tipo de tecnologías y herramientas para recabar el apoyo ciudadano, ya que derivado de la pandemia Covid 19 que azota al mundo, a nuestro País y por obvio a nuestra entidad, y que si bien es cierto hemos iniciado hace semanas la activación cotidiana a lo que se ha denominado la nueva normalidad, también es cierto que prevalecerán y se incrementarán los riesgos de contagios y por lo tanto los ciudadanos deberán seguir adoptando medidas sanitarias, entre ellas la sana distancia, por lo que de no permitirse más opciones y uso de tecnologías se estaría restringiendo en términos de la ley vigente las condiciones para recabar las firmas para obtener el apoyo ciudadano, ya que con esta propuesta se estaría colaborando en mucho en evitar el riesgo de posibles contagios entre los ciudadanos y los aspirantes y sus colaboradores, y pudiera además ser una barrera que impediría lograr la obtención del referido apoyo.



La referida adición de un segundo párrafo al artículo 193, obedece a imponer la obligación a los aspirantes a Candidato Independiente una vez concluido el periodo para recabar el apoyo ciudadano, a retirar toda la publicidad y propaganda impresa y/o digital contratada, y suspender todo tipo de asambleas, perifoneo, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, obligación que no contempla nuestra legislación.

SE PROPONE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 194, 195 Y 196 DE LA LEY

El motivo de la propuesta de modificación de estos numerales consiste en agregar a estos numerales, para en caso de autorizarse el uso de la aplicación digital incluida en la presente iniciativa para recabar el apoyo ciudadano y los casos de excepción que determine el Instituto para el uso de la cedula de respaldo, y los artículos 194, 195 y 196, se refieren al porcentaje de la lista nominal que deberán obtener los aspirantes a Candidatos Independientes para los cargos de Gobernador del Estado, formula de diputados de mayoría relativa y para integrantes de Ayuntamientos, respectivamente.

SE PROPONE ADICIONAR UN PARRAFO AL ARTICULO 234 DE LA LEY

La propuesta de adicionar el párrafo segundo consiste en otorgar el derecho a los Candidatos Independientes a renunciar por escrito ante el Instituto a recibir financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, para sus gastos de campaña, ya que nuestra legislación no contiene este derecho.

SE PROPONE REFORMAR EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN III, Y SE PROPONE ADICIONAR EL INCISO G) DEL ARTICULO 208 DE LA LEY

A la fracción G), se propone adicionarle solo en caso de excepción, y se establece la obligación de los Candidatos Independientes de acompañar a la solicitud de aspirante el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible la Leyenda: "Candidato Independiente", el nombre y cargo, y en su caso lema de campaña.

SE PROPONE MODIFICAR EL ARTICULO 239 DE LA LEY

La intención de modificación de este numeral se basa en que actualmente el contenido y redacción solo limita a los candidatos independientes a tener en su propaganda electoral el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros candidatos independientes, así como tener visible la leyenda "Candidato Independiente".

Sin embargo, proponemos para que existe una verdadera distinción, características y diferencia, que además de lo anterior, se permita se incluya en la propaganda electoral el nombre, el símbolo, el cargo al que aspira, y en su caso el mensaje y/o lema de campaña.

SE PROPONE MODIFICAR EL ARTICULO 242 DE LA LEY

La intención de modificación de este numeral se basa en que actualmente el contenido y redacción solo limita a los candidatos independientes a aparecer en la boleta solo el nombre completo del Candidato Independiente o de los integrantes de la fórmula de Candidatos Independientes.

Sin embargo, en el caso de la redacción vigente, considero lo Candidatos Independientes estarían en desventaja con los partidos políticos, y posibles confusiones entre los mismos Candidatos Independientes, por lo que proponemos que además de los anterior, para que existe una verdadera distinción en la boleta que permita al ciudadano votante poder tener más elementos de identificación, características y diferencia, que se permita se incluya en la boleta electoral el nombre, el símbolo, emblema, y color o colores, el cargo al que aspira, y en su caso el mensaje y/o lema de campaña, que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible la Leyenda: "Candidato Independiente"

En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito someto a la elevada consideración del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ARTÍCULO ÚNICO.- Se **reformen** la fracción III del artículo 3°; el primer párrafo del artículo 77; el artículo 189; el párrafo segundo del artículo 190; el párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 191; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 192; el primer párrafo del artículo 193; los artículos 194, 195 y 196; los párrafos primero y segundo del artículo 199; el inciso f) de la fracción III del artículo 208; los incisos b) y g) del párrafo segundo del artículo 210; el primer párrafo del artículo 223 y los artículos 234, 239 y 242; se **adicionan** las fracciones XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 3°; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII al párrafo primero y un párrafo tercero al artículo 191; un cuarto y quinto párrafo al artículo 192; un segundo párrafo al artículo 193; un párrafo tercero compuesto por los

incisos a) y b) y un párrafo cuarto al artículo 199; un inciso g) de la fracción III del artículo 208; un tercer párrafo al artículo 210 y los incisos a) y b) al artículo 223; todos de la **Ley Electoral del Estado de Baja California Sur**, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.-

Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I y II.-

III. Candidato Independiente: El ciudadano mexicano residente en el Estado de Baja California Sur, que obtenga por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur la constancia de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

IV a XIV.-

XV. Aspirante a Candidato Independiente: El ciudadano mexicano residente en el Estado de Baja California Sur que obtiene del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur su constancia que lo acredite como "Aspirante a Candidato Independiente", para participar en la etapa de obtención de apoyo ciudadano;

XVI. Aplicación móvil: Es La herramienta tecnológica desarrollada y administrada por el Instituto Nacional Electoral, para que las o los solicitantes de un instrumento de participación política recaben las manifestaciones del apoyo ciudadano necesario a favor de determinada candidatura independiente y que contendrá los requisitos establecidos en esta Ley, y en la normatividad electoral, así como para llevar un registro de los auxiliares/gestores y verificar el estado registral de las ciudadanas y los ciudadanos que respaldan las solicitudes, el Instituto dará amplia difusión a los ciudadanos del uso de la aplicación móvil para la obtención del apoyo Ciudadano.

La aplicación digital móvil será diseñada para que las y los aspirantes a una Candidatura Independiente, compartan bajo su responsabilidad la instalación y uso de la aplicación móvil, los cuales se deberán registrar para su debida instalación, capacitación y uso, el número de personas será el que consideren los aspirantes, los que de manera voluntaria los auxiliarán en la captación del apoyo ciudadano y/o registros, por lo que no está orientada para el público general, los usuarios deberán ser registrados y autorizados para obtenerla por los Candidatos Independientes o por conducto de sus representantes legales debidamente autorizados para ello;

XVII. Cédula de respaldo: Es el formato diseñado y autorizado por el Instituto para su uso solo en casos de excepción, que cuando menos contendrá los siguientes datos de los ciudadanos que manifiesten el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta

Ley; nombre y apellidos completos sin abreviaturas, la firma en original en tinta azul, el folio o la clave de elector y el número identificador del reverso de la credencial, así como copia legible por el anverso y reverso de las credenciales para votar, la firma en original en tinta azul y el nombre completo del Aspirante a Candidato Independiente y el cargo para que se postula; y

XVIII. Proceso electoral: El conjunto de actos ordenados por la Constitución local y la ley electoral local, realizados por los órganos y las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos.

Artículo 77.- El proceso electoral ordinario se inicia en la tercera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado, Presidentes Municipales y Diputados Locales. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Estatal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

....

....

....

....

....

....

Artículo 189.- El Consejo General emitirá a más tardar en la tercera semana del mes de noviembre del año previo a la elección, la Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como Candidatos Independientes, señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos de recursos privados para la obtención del apoyo ciudadano, en los términos establecidos en la presente ley que pueden erogar los aspirantes y la determinación de uso de los formatos o aplicación móvil digital para recabar el apoyo ciudadano que determine el Consejo. El Instituto dará amplia difusión a la Convocatoria, así mismo, deberá emitir los lineamientos de orden público, de observancia general y obligatoria en todo el Estado de Baja California Sur y, que tendrán por objeto implementar el uso de la solución tecnológica (aplicación móvil), desarrollada por el Instituto Nacional



Electoral o una similar, para la captación del apoyo ciudadano para el inicio de los instrumentos de participación política que son competencia del Instituto Estatal Electoral, el régimen de excepción en su caso; y la modalidad del formato de recolección de apoyo ciudadano tradicional, solo para aquellos casos en que aplique el régimen de excepción.

Artículo 190.-

Durante los procesos electorales en que se renueven los Poderes Ejecutivo, Legislativo, e integrantes de los Ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta diez días naturales antes de que dé inicio el período para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes reglas:

a) a c).-

. . . .

Artículo 191.- Con la manifestación de intención, el aspirante independiente que pretenda postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular, deberá:

I. Presentar hasta diez días naturales antes de que dé inicio el período para recabar el apoyo ciudadano correspondiente la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de la asociación civil, que deberá protocolizarse ante Notario Público y tener de la Secretaría de Economía la autorización del nombre de la Asociación Civil, y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

II. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente;

III. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del municipio sede de la autoridad electoral donde presente la manifestación de intención respectiva, en caso contrario serán notificados por estrados;

IV. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, cuando menos noventa días antes de la emisión de la convocatoria señalada en el artículo 189 de esta Ley, el cumplimiento de este requisito deberá ser validado por el Instituto;

V. No haber sido condenado por delito doloso;

VI. Gozar de buena salud física y mental;

VII. Certificado de resultado de examen toxicológico, debidamente ratificado ante Notario Público por el Químico firmante;

VIII.- Certificado de residencia de cuando menos dos años en el Estado de Baja California Sur para el cargo de Gobernador, o Municipio de la entidad en caso de los Presidentes Municipales y Diputados.

La persona moral a la que se refiere la fracción I deberá estar constituida preferentemente por lo menos por un representante legal del aspirante a candidato independiente, el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente y un vocal que será el aspirante a candidato independiente.

La violación a cualquiera de los requisitos anteriores, faltar a la verdad, así como la presentación de documentos falsos o alterados, se sancionará con la negativa de registro como Candidato Independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro.

Artículo 192.- En las fechas y plazos que establezca la presente ley, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar en la aplicación móvil digital o en los formatos autorizados en casos de excepción que para ese fin disponga y provea el Consejo General, el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por los medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Gobernador del Estado, contarán con setenta días naturales para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, durante el periodo comprendido del día 22 de diciembre al día 1 de marzo del año de la elección.

Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Integrante de Ayuntamiento, contarán con cincuenta días naturales para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, durante el periodo comprendido del día 22 de diciembre al día 9 de febrero del año de la elección.

Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Diputado de Mayoría Relativa, contarán con treinta y cinco días naturales para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, durante el periodo comprendido del día 22 de diciembre al día 25 de enero del año de la elección.

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los párrafos anteriores. Cualquier ajuste que el Consejo Estatal realice deberá ser difundido ampliamente.



Artículo 193.- Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas y privadas, entrevistas y pláticas en radio y televisión, publicidad y propaganda impresa o por cualquier medio digital, asambleas, perifoneo, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, siempre que estos no constituyan actos anticipados de campaña, y que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos y plazos señalados por esta Ley, y se autoriza establecer módulos en lugares públicos o privados, así como el uso de todo tipo de tecnologías y herramientas para tal fin.

Una vez concluido el periodo para recabar el apoyo ciudadano, los aspirantes a Candidato Independiente, deberán retirar toda la publicidad y propaganda impresa y/o digital contratada, y suspender todo tipo de asambleas, perifoneo, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general.

Artículo 194.- Para la candidatura de Gobernador del Estado, la aplicación móvil digital y en los casos de excepción que determine el Instituto de la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2.51% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos nueve distritos electorales, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

Artículo 195.- Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la aplicación móvil digital y en los casos de excepción que determine el Instituto de la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 5% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 2% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Artículo 196.- Para integrantes de Ayuntamientos, la aplicación móvil digital y en los casos de excepción que determine el Instituto de la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 5% de la lista nominal de electores correspondiente a la circunscripción territorial del municipio que corresponda, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 3% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Artículo 199.- Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo Estatal por el tipo de elección y cargo para la que pretenda ser postulado.

El Consejo General determinará el tope de gastos para recabar el apoyo ciudadano equivalente al diez por ciento del tope total de gastos de campaña determinados y establecidos por el Instituto para la elección y cargo de que se trate.

El Instituto al fijar los montos correspondientes al límite de financiamiento privado para recabar el apoyo ciudadano y que se constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y de manera individual sus simpatizantes, el cual no podrá rebasarse en ningún caso conforme a lo siguiente:

a).- Los límites de aportaciones individuales que pueden realizar al aspirante a la candidatura independiente los simpatizantes para la obtención del apoyo ciudadano, corresponderán a un monto equivalente al 0.5 por ciento del tope total de gastos de campaña determinados por el Instituto para la elección y cargo de que se trate; y

b).- Los límites de todas las aportaciones individuales que podrán realizar los aspirantes candidatos independientes para la obtención del apoyo ciudadano, corresponde a un monto equivalente al 10 por ciento del tope total de gastos de campaña determinados por el Instituto para la elección y cargo de que se trate.

El Instituto podrá realizar los cálculos y determinaciones de montos y topes de aportaciones privadas tanto para la obtención del apoyo ciudadano como para la campaña en un mismo acuerdo, sin que rebase el plazo fijado en la Ley.

Artículo 208.-

I y II.-

III. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) a e).-

f) La cédula de respaldo para los casos de excepción la cual deberá contener el nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta Ley.

g) El emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible la Leyenda: "Candidato Independiente", el nombre y cargo, y en su caso lema de campaña.

IV.-

a) a c).-

V.-

....

Artículo 210.-

....

a).-

b) No se acompañen a las cédulas de respaldo autorizadas en caso de excepción las copias de la credencial para votar vigente, y no se cumplan con los requisitos en el debido uso y pasos que establezca la aplicación digital móvil y las imágenes de las credenciales para votar sean ilegibles, borrosas, o simuladas, o solo contengan cierta información simulada o fraudulenta, pretendiendo engañar a la autoridad, o se advierta fueron tomadas las imágenes de fotografías o de copias a color de las credenciales para votar, o no aparezca completa la imagen de la misma, y la fotografía del ciudadano que otorga el apoyo ciudadano sea ilegible, o que se determine se alteró de cualquier forma la aplicación digital;

c) a f).-

g) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera manifestación presentada.

La información del contenido de la captación del respaldo ciudadano recabado a través de la aplicación digital móvil autorizada por el Instituto, la que será enviada o entregada por los Candidatos Independientes al Instituto Estatal Electoral, donde será extraída la información contenida en la misma, y utilizada para ejercer las facultades de validación y verificación de situación registral, conforme a los procedimientos digitales y la normativa electoral, y solo en los casos de excepción de su uso autorizado por el Instituto la cédula de respaldo que contengan el nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta Ley.

Artículo 223.- Al fijar los montos correspondientes al límite de financiamiento privado que pueda recibir el candidato independiente, se deberá considerar el financiamiento público para la obtención del voto al cual tienen derecho, a fin de que en ningún caso se determine que el límite de financiamiento privado sea igual al monto total del tope de gastos de campaña, el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y de manera individual sus simpatizantes, el cual no podrá rebasarse en ningún caso conforme a lo siguiente:

a).- Los límites de aportaciones privadas individuales que pueden realizar a la campaña del candidato independiente los simpatizantes, corresponderán a un monto equivalente al 0.5 por ciento del tope total de gastos de campaña determinados por el Instituto para la elección y cargo de que se trate.

b).- Los límites de todas las aportaciones privadas individuales que podrán realizar en apoyo a los candidatos independientes a su campaña, corresponden a un monto equivalente al 10 por ciento del tope total de gastos de campaña determinados por el Instituto para la elección y cargo de que se trate.

Artículo 234.- Los Candidatos Independientes tendrán derecho a renunciar por escrito ante el Instituto al derecho de recibir financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, para sus gastos de campaña.

Artículo 239.- La propaganda electoral de los Candidatos Independientes deberá tener el nombre, el cargo de elección popular al que aspira, el símbolo o emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible la Leyenda: "Candidato Independiente", y en su caso el mensaje y/o lema de campaña.

Artículo 242.- En la boleta, de acuerdo a la elección de que se trate, aparecerá el nombre completo del Candidato Independiente o de los integrantes de la fórmula de Candidatos Independientes, así como el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible la Leyenda: "Candidato Independiente".

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

La Paz, Baja California Sur, a los 07 días del mes de Julio del año 2020.

ATENTAMENTE

RAMON ALEJO PARRA OJEDA